EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN EL DERECHO INTERNACIONAL

LORETTA ORTIZ AHLF

SUMARIO: 1. *Conceptualización del derecho de acceso a la justicia de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos;* 2. *El derecho de acceso a la justicia y a un recurso jurídico efectivo para la protección de los derechos humanos en México;* 3. *El derecho de acceso a la justicia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.*

RESUMEN: En una primera parte se define el contenido del derecho de acceso a la justicia conforme a las normas de derecho internacional de Derechos Humanos, en el segundo apartado se analiza con base en las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sentencias de la Corte Interamericana si México garantiza de manera efectiva el derecho de acceso a la justicia. Por último, se determina si de acuerdo a la normatividad que rige al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se garantiza el acceso a justicia ante estas instancias internacionales.

ABSTRACT: Nella prima parte si delinea il contenuto del diritto d'accesso alla giustizia in conformità con le norme del diritto internazionale dei diritti umani. Nella seconda sezione si analizza sulla base delle risoluzioni della Commissione Interamericana sui Diritti Umani, e le sentenze della Corte, se il Messico garantire efficacemente il diritto di accesso alla giustizia. Infine, si stabilisce se secondo le norme che disciplinano il Sistema Interamericano per il Diritti Humano garantisce l'accesso alla giustizia verso questi organismo internazionali.

ABSTRACT: In the first section we define the law content referring to the right of access to justice in accordance with the international law of human rights, in the second section, is analyzed based on the resolutions of the Interamerican Commission on Human Rights and the sentences of the Interamerican Court of Human Rights, if Mexico effectively guarantees the right of access to justice. Finally, it is determined if according to the normativity governing the Interamerican Human Rights System, access to justice to these international bodies is guaranteed.

PALABRAS CLAVE: acceso a la justicia-debido proceso.

PAROLE CHIAVE: Accesso alla giustizia-giusto processo.

KEYWORDS: access to justice-due process of law.

1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DE CONFORMIDAD CON EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El derecho de acceso a la justicia se transformó, de un derecho de enunciación general y carente de efectividad, en un derecho fundamental de primer orden, cuya regulación, exigió un detalle muy minucioso, para garantizar de manera efectiva su ejercicio. De tal suerte, que de un concepto jurídico tan general como el de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dispone *toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante tribunales nacionales competentes, que le ampare, contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley*,¹ se llega en instrumentos recientes a un detalle y sofisticación que no imaginaron los redactores de la Declaración Universal.

Dentro de los instrumentos internacionales que empiezan a definir, el derecho de acceso a la justicia y con ello a ampliar su ámbito de protección y garantía, ubicamos el

¹ *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), cuyo artículo 14, detalla con gran amplitud el contenido del derecho de acceso a la justicia y que en su parte medular señala *todas las personas son iguales ante los tribunales y las cortes de justicia, tendrán derecho a ser oídas públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación*.²

La Convención Americana de San José Rica, regula el derecho de acceso a la justicia en sus artículos 7, 8, y 25 disposiciones en cuya parte medular se establece:

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

- a) *derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete, si no comprende o no habla el del juzgado o tribunal;*
- b) *comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;*
- c) *concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;*
- d) *derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro un plazo establecido por la ley;*
- e) *derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;*
- f) *derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; y*
- g) *derecho a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior.*

² *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*, adoptado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966, aprobado por el Senado el 18 de diciembre de 1980, adhesión de México el 23 de marzo de 1981, entrada en vigor internacional el 23 de marzo de 1976, entrada en vigor para México el 23 de junio de 1981, publicado en el DOF el 20 de mayo de 1981, Fe de erratas de 22 de junio de 1981.

- h) *La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.*
- i) *El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos.*
- j) *El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de justicia.*³

Deben considerarse además en la determinación del contenido del derecho de acceso a la justicia el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a la abolición de la pena de muerte.⁴ Las diversas Resoluciones de Naciones Unidas referentes al tema, ubicamos entre otras la atinente a los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura,⁵ las Directrices sobre la Función de los Fiscales,⁶ los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados,⁷ el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de

³ Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", adoptada en San José Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, aprobada por el Senado 18 de diciembre de 1980, adhesión de México el 24 de marzo de 1981, entrada en vigor internacional el 18 de julio de 1978, entrada en vigor para México el 24 de marzo de 1981, publicada en el DOF de 7 de mayo de 1981.

⁴ Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Destinado a abolir la pena de muerte, ONU, Nueva York, 15 de diciembre de 1989, aprobado por el Senado el 24 de abril de 2007, adhesión de México 26 de septiembre de 2007, entrada en vigor internacional el 11 de julio 1991, entrada en vigor para México el 26 de diciembre de 2007, publicado en el DOF 26 de octubre de 2007.

⁵ Adoptados por el Séptimo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985 y confirmados por la Asamblea General en sus Resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/46 de 13 de diciembre de 1985.

⁶ Aprobadas por el Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en la Habana, Cuba del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

⁷ Aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en la Habana, Cuba del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

Hacer Cumplir la Ley.⁸ Reglas Mínimas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio).⁹ Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias,¹⁰ Reglas Mínimas para la Administración de la Justicia de Menores.¹¹ Reglas para la Protección de Menores Privados de la Libertad.¹² Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión,¹³ Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos,¹⁴ Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos¹⁵ y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.¹⁶

Las Resoluciones antes citadas fueron formuladas como instrumentos para lograr la debida aplicación e incorporación de las normas internacionales de derechos humanos relativas al derecho fundamental del acceso a la justicia. Algunas de ellas, a pesar de detallar el contenido del derecho, utilizan conceptos de difícil implementación por cuanto adolecen de falta de precisión. Así por ejemplo, la norma

⁸ Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979.

⁹ Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990.

¹⁰ Consejo Económico Social Resolución 1989/65 de 24 de mayo de 1989.

¹¹ Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985.

¹² Adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990.

¹³ Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988.

¹⁴ Adoptadas por el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955 y aprobadas por el Consejo Económico Social en sus Resoluciones 663 (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.

¹⁵ Adoptados y proclamados por la Asamblea General en su Resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990.

¹⁶ Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979.

que establece el deber del Estado de garantizar que la causa sea oída equitativamente en un plazo razonable por tribunal independiente, incorpora conceptos que requieren de la determinación de su significado, para plasmarlos en la legislación interna y lograr con ello una debida aplicación del tratado en materia de derechos humanos.

Con base en los tratados, resoluciones de Naciones Unidas, reglas y códigos de conducta antes señalados, el derecho internacional de los derechos humanos determina como contenido sustantivo mínimo del derecho de acceso a la justicia, el siguiente:

- acceso a la jurisdicción;
- a un juez competente, imparcial y predeterminado por ley;
- a la tutela judicial efectiva;
- a un juicio justo;
- a la igualdad ante la ley y los tribunales de justicia;
- a la no discriminación por motivos de raza, nacionalidad, condición social, sexo, ideología política o religión;
- a la presunción de inocencia;
- irretroactividad de la ley penal;
- responsabilidad penal individual;
- derecho a la defensa y asistencia letrada;
- a comunicarse con su defensor en forma confidencial, sin demora y sin censura;
- disponer del tiempo necesario y de los medios adecuados para su defensa;
- a ser informado de manera inmediata y comprensible de sus derechos;
- a conocer los motivos de la detención y la autoridad que lo ordena;

- a ser juzgado dentro de un plazo razonable;
- a no ser juzgado dos veces por un mismo delito;
- a no ser encarcelado por el incumplimiento de deudas o de obligaciones contractuales;
- a no ser obligado a declarar, ni a confesarse culpable;
- a un intérprete o traductor;
- a la protección contra todo tipo de detención ilegal;
- a un recurso efectivo ante tribunales superiores competentes, independientes e imparciales;
- a que en el proceso penal se asegure que la libertad penal será reconocida y respetada por regla general y la prisión preventiva como la excepción;
- a la no aplicación de la pena de muerte;
- indemnización por error judicial.
- Prohibición y protección efectiva contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
- prohibición y protección efectiva contra las desapariciones forzadas e involuntarias;
- prohibición y protección efectiva contra las ejecuciones sumarias o arbitrarias; y
- en caso de detención en el extranjero a la notificación consular inmediata.

Además debe considerarse que cada uno de los derechos que están obligados a garantizar los Estados a toda persona que forman parte del derecho de acceso a la justicia, puede ser definido por diversas resoluciones de organismos internacionales o sentencias de tribunales internacionales. Un ejemplo, en ese sentido, lo ubicamos en varias sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derecho Humanos que aluden al derecho fundamental de acceso a la justicia, en una de ellas puntualiza la Corte:

...la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una trasgresión de la misma por el Estado parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que este previsto en la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ellos pueden ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el poder Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o cuando, por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial.¹⁷

2. EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO JURÍDICO EFECTIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

México ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) en 1981. A pesar de que han transcurrido más de 30 años de la ratificación de dichos instrumentos, en México no se garantiza de manera efectiva el derecho de acceso a la justicia, ni el acceso a un recurso jurídico efectivo, en caso de vulneración de los derechos humanos.

¹⁷ Opinión Consultiva 11/90. Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Artículo 46.1, 46.2.a y 46.2.b de la Convención Americana de Derechos Humanos).

Dispone el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos:

Artículo 25. Protección judicial.

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados parte se comprometen:
 - a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
 - b) a desarrollar las posibilidades de un recurso judicial, y a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.¹⁸

Por su parte, señala el artículo 2, párrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

1. Cada uno de Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:
 - a) Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de funciones oficiales;
 - b) La autoridad competente, judicial administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

¹⁸ Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, ratificación de México 24 de marzo de 1981, entrada en vigor 18 de junio de 1978, publicación en el *DOF* 7 de mayo de 1981.

- c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.¹⁹

La operatividad actual del derecho de acceso a la justicia y del juicio de amparo en México, en lo relativo a mecanismo jurídico de garantía y efectiva protección de los derechos humanos, dista mucho de ajustarse a los requerimientos tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos, como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son pocos los avances que se han logrado para transformar y convertir dicho proceso, sobre todo si se considera la obligación contenida en el artículo 2° de ambos instrumentos, que exige a los Estados que realicen, si no de manera inmediata lo antes posible, las reformas constitucionales y legales necesarias para lograr la efectiva aplicación de los mencionados tratados y con ello a su vez alcanzar la efectiva protección de los derechos humanos.

La falta de adecuación de la legislación interna lesiona gravemente los derechos fundamentales, se deniega el derecho de acceso a la justicia incluso para el reclamo de los derechos fundamentales. Llama la atención que la necesidad de garantizar el acceso a un recurso eficiente para la protección de los derechos fundamentales se planteó desde el Constituyente de 1916-1917, sin embargo hasta hoy día no se ha logrado satisfacer dicha necesidad, Venustiano Carranza manifestó en dicho Constituyente:

Hay que reconocer, dijo Don Venustiano Carranza... que en el fondo de la tendencia a dar al artículo 14 constitucional una extensión indebida estaba la necesidad ingente de reducir a las autoridades de los Estados a

¹⁹ Artículo 2, párrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200^a (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor 23 de marzo de 1976, ratificación de México 23 de marzo de 1981, publicación en el DOF 20 de mayo de 1981, Fe de Erratas 22 de junio de 1981.

*sus justos límites, pues bien pronto se palpó que, convertidos los jueces en instrumentos ciegos de los gobernadores que descaradamente se inmiscuían en asuntos que estaban por completo fuera del alcance de sus atribuciones, se hacía preciso tener un recurso, acudiendo a la autoridad judicial federal para reprimir tales excesos.*²⁰

Para evaluar si se garantiza en México el derecho de acceso efectivo a la justicia, como lo exigen los instrumentos internacionales, conviene revisar algunos de los casos presentados en contra de México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (TIDH).

La cuestión de la naturaleza del juicio de amparo y de las obligaciones del Estado mexicano de conformidad con el citado artículo 25 CADH, se analizó en el Caso 10.180 del 23 de octubre de 1987, presentado por Eduardo Arias Aparicio, Luis Santos de la Garza, María Teresa García de Madero y Miguel Gómez Guerreo todos ellos diputados del Partido de Acción Nacional en contra de México, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en dicho caso la CIDH señaló en su informe:

En el caso bajo examen, por lo tanto, México, al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos asumió las obligaciones de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por ella, contenidos en su artículo 1, y de adoptar las disposiciones de derecho interno "para hacer efectivos tales derechos y libertades", establecidas en el artículo 2, las cuales tienen aplicación, en el Caso No. 10.180 al ejercicio de los derechos políticos reconocidos en el artículo 23, así como en la necesidad de contar con un recurso efectivo ante tribunales competentes, independientes e imparciales, en los términos de los artículos 8 y 25 de la convención. Resulta pertinente recordar en esta oportunidad nuevamente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Sentencia de 29 de Julio de 1988 en el

²⁰ Congreso Constituyente 1916-17, Diario de Debates. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Edición Facsimilar, México, 1985, p. 17.

Caso Velázquez Rodríguez, consideró que la obligación de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos contenida en el artículo 1.1 de la CADH "implica el deber de los Estados Parte de organizar todo el aparato gubernamental y en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos"... Estas obligaciones contenidas en los primeros dos artículos de la CADH son los que imponen al Gobierno de México la exigencia de tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su Constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes (de las entidades componentes de la Federación puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de la Convención). La solución planteada por el gobierno de México tendiente a lograr la aplicación del juicio de amparo en materia política con base en la violación del principio de la garantía individual derivada del principio de legalidad contenido en el artículo 14 de la Constitución constituye, al parecer, una interpretación novedosa pues el Gobierno de México no aporta información sobre la aplicación exitosa de casos concretos. La Comisión debe señalar que el recurso planteado dista de ser el recurso sencillo, rápido y efectivo para proteger los derechos políticos en los términos de la CADH.²¹

De igual forma, en el Caso 10.956 de 7 de octubre de 1993, preciso la Comisión en su informe:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima oportuno reiterar al Gobierno de México su deber de adoptar las disposiciones de derecho interno con arreglo a sus procedimientos constitucionales y legales, a fin de asegurar el ejercicio pleno de los derechos políticos, en particular, en relación con la idoneidad de los recursos previstos en la legislación interna, a fin de que los ciudadanos de ese país puedan contar con recursos sencillos, rápidos y efectivos, despojados de rigorismos innecesarios que afecten la eficacia, en la protección de todos los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin distinción alguna.²²

²¹ Informe No. 8/91, Caso 10.180 de Comisión Interamericana de Derechos Humanos en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/90.91sp/Mexico10180.htm>. Subrayado de la autora del trabajo. Subrayado de la autora de este trabajo.

²² Informe No. 14/93, Caso 10.956 de 7 de octubre de 1993, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, <http://www.cidh.oas.org/annualrep/93span/capIII.mexico10.956.htm>.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas Sentencias²³ también ha enfatizado la importancia del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, puntualizando que dicha obligación exige no sólo una adecuada regulación en la materia, sino el garantizar un acceso efectivo y rápido. En palabras del Juez de la Corte Internacional de Justicia Antônio Augusto Cançado Trindade la obligación del artículo 25, no se reduce a garantizar al acceso formal, *stricto sensu*, a la instancia judicial (tanto interna como internacional), sino comprende, además, el derecho a la prestación jurisdiccional al acceso a la justicia dotado de contenido jurídico propio que significa *lato sensu*, el derecho a obtener justicia.²⁴

En el Caso Castañeda de 6 de julio de 2009, la Corte aludió a la naturaleza de las obligaciones contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y a la falta de cumplimiento de México de las mismas, al carecer el ordenamiento jurídico de México de un recurso efectivo para la protección de los derechos fundamentales, apunta la Corte en relación a la naturaleza de las obligaciones:

Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (*effet utile*) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones del Tribunal. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea

²³ Ver: Caso Hilarie, Constantine, y Benjamin y Otros *versus* Trinidad y Tobago (Sentencia del 21.06.2002) Caso Bámaca Velásquez *versus* Guatemala (Sentencia de 25.11.2000), Villagrán Morales y Otros *versus* Guatemala (Sentencia del 19.11.1999), Juan Humberto Sánchez *versus* Honduras (Sentencia del 07.06.2003), Caso Duran y Ugarte *versus* Perú (Sentencia del 18.08.2000).

²⁴ Cançado Trindade, Antônio Augusto, *Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esencia y Trascendencia*, México, Ed. Porrúa, 2006, p. 755.

*verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos.*²⁵

En relación al incumplimiento de México de sus obligaciones precisa la Sentencia:

*El Estado debe, en un plazo razonable, completar la adecuación de su derecho interno a la Convención, de tal forma que ajuste la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano de acuerdo con lo previsto en la reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007, de manera que mediante dicho recurso se garantice a los ciudadanos de forma efectiva el cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido.*²⁶

Sobresale en el Caso Castañeda nuevamente la necesidad del Estado Mexicano de ajustar su Constitución y legislación interna para contar con un recurso efectivo mediante el cual garantice de manera sencilla y rápida los derechos regulados en la Convención Americana de Derechos Humanos. No basta para que México cumpla con sus obligaciones internacionales, de conformidad con la argumentación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Castañeda, con regular y garantizar un acceso formal a un recurso jurídico, se requiere garantizar un acceso rápido y eficiente, para con ello asegurar la debida protección de los derechos fundamentales.

Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) *vs* México, puntualizó:

²⁵ Caso Castañeda Gutman *vs* Estados Unidos Mexicanos de 6 de Julio de 2009, en <http://www.corteidh.org.cr/docs/>. Cfr. Caso Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999, Serie C No. 54, Párr. 37; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz *vs* Perú, supra nota 1, considerando sexto, y Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez *vs* Ecuador, supra nota 1, considerando sexto.

²⁶ Caso Castañeda Gutman *vs* Estados Unidos Mexicanos de 6 de julio de 2009, en <http://www.corteidh.org.cr/docs/>

Todo ello permite concluir que en el presente caso existe impunidad y que las medidas de derecho interno adoptadas han sido insuficientes para enfrentar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas. El Estado no demostró haber adoptado normas o implementado las medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al artículo 7.c de la Convención Belém do Pará, que permitieran a las autoridades ofrecer una investigación con debida diligencia. Esta ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir.

*Por lo expuesto, el Tribunal concluye que el Estado incumplió con su deber de investigar —y con ello su deber de garantizar— los derechos consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y con el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal. Por los mismos motivos, el Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y 7.b y 7.c de la Convención Belém do Para, en perjuicio de los familiares de las tres víctimas identificados en el párrafo 9 supra.”*²⁷

Sobresale en este caso la obligación del Estado mexicano de garantizar un acceso efectivo a la justicia, al puntualizar que con la ineficacia judicial frente a casos de violencia contra las mujeres en Juárez se envía un mensaje de tolerancia y aceptación de estos crímenes, situaciones que generan la responsabilidad internacional del Estado.

De manera mucho más clara y precisa en el Caso Radilla Pacheco *vs* México, con relación al juicio de amparo la Corte señala:

²⁷ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) *vs* México, Sentencia de 16 de noviembre de 2009, p. 100 en <http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm>.

Al respecto, de los hechos del presente caso se desprende que una vez que el Juzgado Segundo de Distrito decidió declinar su competencia a favor de la jurisdicción militar, la señora Tita Radilla Pacheco interpuso un juicio de amparo para revocar esta resolución. Sin embargo, esta demanda fue desechada en primera instancia (*supra* párr. 262) ya que con base en el artículo 10 de la Ley de Amparo) "el ofendido o víctima del delito, sólo puede intentar el juicio de garantías cuando se trate de algún acto relacionado directa e inmediatamente con la reparación del daño.

La señora Tita Radilla Martínez interpuso un recurso de revisión en contra de dicha decisión. El Tribunal observa que, por "razón de turno", correspondió al mismo Primer Tribunal Colegiado que resolvió la cuestión relativa al conflicto competencial (*supra* párr. 265) conocer del recurso de revisión. De la decisión de 24 de noviembre de 2005, solicitada por este Tribunal como prueba para mejor resolver (*supra* párr. 12) se desprende que el Primer Tribunal Colegiado estableció que no serían "motivo de estudio ni la resolución impugnada ni los agravios propuestos por la [señora Tita Radilla Martínez]", debido a que lo reclamado guardaba relación con el conflicto competencial ya resuelto. En tal sentido, dicho Tribunal Colegiado señaló que había "sobrevenido" una causal diversa a la invocada por el Juzgado Segundo de Distrito (*supra* párr. 292) para desechar el amparo y que, en consecuencia, era aplicable lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, según el cual, éste es improcedente "cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" Por tanto, en razón de que previamente ya había resuelto la competencia en favor del fuero militar en el mismo asunto, el Primer Tribunal Colegiado confirmó el desechamiento de la demanda de amparo promovida por la señora Tita Radilla Martínez.²⁸

De la decisión anterior, claramente puede concluirse que se privó a la señora Tita Radilla Martínez de la posibilidad de impugnar la competencia de los tribunales militares para conocer de asuntos que, por su naturaleza, debe corresponder a las autoridades del fuero ordinario.

²⁸ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, p. 81, en <http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm>.

Al respecto, la Corte ha señalado que los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas.

La Corte en el Caso Radilla no se detuvo en su argumentación jurídica, en ninguna de las razones que esgrimió el Gobierno de México para justificar el sobreseimiento del amparo, bastó la comprobación del impedimento de acceso a un recurso jurídico efectivo para determinar que a la Sra. Tita Radilla se le negó el derecho de acceso a la justicia en los términos de los artículos 8.1 y 25.1 de la CADH y con ello responsabilizar al Estado mexicano.

Algunas de las razones por las cuales México, no garantiza el derecho de acceso a la justicia y a un recurso jurídico eficiente para la protección de los derechos humanos, ajustándose a lo establecido en los instrumentos internacionales, son las siguientes:

2.1. La exigencia de una parte agraviada en el amparo

La interpretación jurisprudencial tanto de "parte" como de "agravio", han obstaculizado el acceso al amparo y lo han convertido en un mecanismo ineficiente para la debida protección de los derechos humanos. Un ejemplo claro de dicha situación lo ubicamos en el siguiente caso:

Previamente al estudio del fondo del asunto que precede al análisis de las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o sean advertidas de oficio por el suscrito, por ser ésta la cuestión de orden público

y de estudio preferente en los términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 73, de la Ley de Amparo y de conformidad con la Tesis Jurisprudencial número 940, visible en la página 1538 de la Segunda Parte del Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1988, bajo el rubro IMPROCEDENCIA. El Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en su informe justificado manifiesta que el quejoso por sí y en calidad de representante legal de la asociación civil, "Grupo de los Cien Internacional"; carece de la legitimación para promover el presente juicio de garantías, y por lo tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación al artículo 4º del mismo ordenamiento legal, ya que no ha resentido un agravio personal y directo.²⁹

Debería de proceder el juicio de amparo por el simple hecho de una vulneración o afectación de un derecho fundamental o garantía individual, los conceptos de parte agraviada al igual que interés legal suelen constituir impedimentos para el ejercicio del legítimo del derecho de acceso a la justicia en caso de vulneración de los derechos humanos.

2.2. El principio de supremacía constitucional

El estándar de protección de los derechos humanos contemplado en los tratados ratificados por México en la mayoría de los casos, es más amplio que el regulado por nuestra Constitución. A pesar de la reforma constitucional de 2011 al artículo 1º constitucional, la reciente jurisprudencia de la Suprema Corte³⁰ vuelve inoperante dicha

²⁹ Amparo en Revisión promovido por Homero Aridjis Fuentes vs el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, radicado en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Sentencia 16 de septiembre de 1996.

³⁰ Tesis: P/J. 64/2014 (10a.) *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Pleno Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I. p. 8; y Tesis: 1a./J. 29/2015 (10a.) *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación* Décima Época, Primera

reforma en caso de conflicto entre la norma constitucional y el tratado de derechos humanos, conforme a la mencionada jurisprudencia prima la Constitución. Con lo cual, la incorporación de las normas convencionales de derechos humanos a nuestro sistema jurídico, únicamente se produce cuando la norma convencional es acorde con la Carta Magna, si es contraria la norma convencional, al no incorporarse dicha norma a nuestro sistema jurídico, no opera ningún recurso jurídico de protección del derecho fundamental vulnerado, lo que a su vez genera responsabilidad internacional.³¹

Una de las obligaciones internacionales del Estado mexicano de conformidad con la CADH y PIDCP en caso de presentarse contradicciones como las mencionadas de conformidad con la Cláusula "pro homine", contenida tanto en la Convención Americana como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sería aplicar la norma más

Sala Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, p. 240, Jurisprudencia (Constitucional). DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA. Acorde con lo sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P/J. 20/2014 (10a.), las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, ya que se integran al catálogo de derechos que funciona como un parámetro de regularidad constitucional. Por tanto, cuando un derecho humano esté reconocido tanto en la Constitución Federal, como en los tratados internacionales, debe acudirse a ambas fuentes para determinar su contenido y alcance, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; en el entendido de que cuando exista en la Constitución una restricción expresa al ejercicio de un derecho humano, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.

³¹ Cfr. Vázquez Pando, Fernando Alejandro, "Algunas reflexiones sobre la Constitución Mexicana, a la luz de algunos tratados internacionales sobre derechos humanos en que México es Parte", en *Revista de Investigaciones Jurídicas*, Número 11, Escuela Libre de Derecho, México, 1987, pp. 525 a 553.

favorable para la persona y no necesariamente la constitucional.³²

2.3. *Denegación del derecho de acceso a la justicia a las personas que carecen de recursos para pagar los honorarios de un abogado o traductor cuando no conozca la lengua del Tribunal*

El derecho de acceso a la justicia y a un recurso jurídico eficiente, rápido y sencillo, contemplado tanto en la CADH como en el PIDCP, exige que se garantice a cualquier persona en todo proceso un abogado y traductor cuando no conozca la lengua del Tribunal. Dicha obligación obedece a que se debe garantizar no sólo el acceso formal a un recurso jurídico con las características mencionadas, sino un acceso efectivo. Nuestra Constitución no garantiza dichos derechos fundamentales a toda persona como lo señalan la CADH y el PIDCP.

Cabe precisar que no debe confundirse el derecho de asistencia legal y a un traductor con el derecho de acceso a los tribunales contemplado en nuestro artículo 17 constitucional.

2.4. *La falta de eficacia de los procesos*

Eficacia del derecho significa en palabras de Germán Bidart Campos "la legitimación del titular del derecho para que se reconozca su disfrute y su ejercicio, para dispo-

³² Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en la Asamblea General de la ONU, el 16 de diciembre de 1966, ratificación de México el 23 de mayo de 1981. La Convención Americana de Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969 y México ratificó el 24 de marzo de 1981.

ner paralela y simultáneamente de vías idóneas a través de las cuales hacer valer su derecho, defenderlo, lograr su reconocimiento impedido o postergado y reparar su violación".³³ Con base en dicha conceptualización, puede definirse la eficacia del derecho de acceso a la justicia como el reconocimiento o la legitimación de las personas nacionales o extranjeros para acudir a los tribunales para hacer valer, defender, impedir o reparar la violación de sus derechos humanos a través de dicho juicio de manera pronta y expedita.

Mauro Cappelletti y Bryant realizaron diversas investigaciones para determinar la eficacia del derecho de acceso a la justicia,³⁴ con base en ellas llegan a la conclusión de que dicho derecho se ve obstaculizado entre otros factores por los siguientes:

- a) El costo de los litigios y en los juicios de menor cuantía que los abogados no desean llevar dichas causas.
- b) La duración de los procesos y los retrasos injustificados.
- c) Las asimetrías entre las partes lo cual origina en algunas ocasiones que una de ellas disfrute de ventajas. Así por ejemplo, las personas y organizaciones que poseen recursos financieros considerables o relativamente altos, pueden utilizarlos para litigar y tienen ventajas obvias en la defensa de sus reclamaciones.
- d) La falta de conocimiento legal básico no sólo para cuestionar sino para comprender que se puede impugnar.

³³ Bidart Campos, Germán, "Sobre derechos humanos, obligaciones y otros temas afines", T. I, México, UNAM, 1990, *Estudios en Homenaje al Dr. Héctor Fix Zamudio*, p.25.

³⁴ Cappelletti, Mauro y Bryant, Garth, *El acceso a la justicia, La tendencia en el movimiento para hacer efectivos los derechos, México*, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 13.

- e) El reclamo de intereses difusos o colectivos, como los relativos al medio ambiente y los derechos de los consumidores, normalmente resultan procesos muy complicados, por lo que resultan poco atractivos para los abogados, en razón de los escasos beneficios económicos que les llegan a generar.
- f) La carga excesiva de asuntos en los tribunales, la falta de capacitación de los jueces.³⁵

Los obstáculos mencionados por Capelletti y Bryan como causas que impiden el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia son aplicables en el caso del juicio de amparo en México, obstáculos que no pueden eliminarse uno por uno, ya que están interrelacionados.³⁶

2.5. La falta de ejecución pronta de las sentencias

El lograr un acceso efectivo a la justicia exige garantizar el ejercicio efectivo de los derechos mediante la ejecución de las resoluciones o sentencias que dicte el Poder Judicial. Sobre esta cuestión puntualiza Miguel Carbonel que "en México poco se ha avanzado en lo relativo al acatamiento de las sentencias, a pesar de que se han llevado a cabo diversas reformas en ese sentido desde 1994. Dichas reformas se han utilizado, mas como arma para atacar el adversario político, situación que poco tiene que ver con el derecho del gobernado a la ejecución de las sentencias".³⁷

Si la exigencia del cumplimiento de sentencias es necesario para asegurar un efectivo acceso a la justicia, en el

³⁵ *Idem.*

³⁶ *Ibidem*, p. 22.

³⁷ Carbonel, Miguel, *Los Derechos Fundamentales en México*, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Universidad Autónoma de México, 2004, p. 735.

caso de los derechos fundamentales es de vital importancia garantizar dicho derecho, ya que, de no ser así la autoridad continuará vulnerando los derechos fundamentales sin sentirse constreñida, ni limitada en ningún momento para restituir al individuo el derecho humano o garantía individual restringida o vulnerada.

2.6. Derecho a una indemnización en caso de error judicial

Señalan el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 14 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

*Artículo 10. Derecho a indemnización. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.*³⁸

Artículo 14...

*6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.*³⁹

A pesar de que se contempla en dos tratados pilares en materia de derechos humanos la obligación de los Estados

³⁸ Artículo 10, Convención Americana sobre de Derechos Humanos, adoptada en San José Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, publicada en el D.O.F. de 7 de mayo de 1981.

³⁹ Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su Resolución 220^a (XXI), el 16 de diciembre de 1966, publicado en el *DOF* del 22 de junio de 1981.

de indemnizar a las víctimas en caso de cometer error judicial, en el sistema jurídico mexicano no existe una sola disposición que permita la aplicación del artículo 10 de la CADH y el 14 del PIDCP. El artículo 113 de la Constitución de México, no resulta aplicable para las indemnizaciones por error judicial, sólo contempla la responsabilidad del Estado por daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause a bienes y derechos de los particulares.⁴⁰

Tanto el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos requieren, para aplicarse en México, de legislación federal y local que permita el pago de la indemnización en caso de dicho error. Cabe precisar, que el hecho de que dichas disposiciones no puedan aplicarse en México por falta de legislación que lo permita, no exime de la correspondiente responsabilidad internacional al Estado Mexicano.

En los Casos Radilla Pacheco y González y Otras contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quedó evidenciado que en virtud del error judicial las víctimas tienen derecho a una indemnización, razón por la cual uno de los puntos resolutivos de ambas Sentencias condenó a México en ambos casos al pago de indemnizaciones a las víctimas entre otras cuestiones.⁴¹

⁴⁰ Castro Estrada, Álvaro, *Responsabilidad Patrimonial del Estado*, México, Ed. Porrúa, 1997, p. 494.

⁴¹ Véase: Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, Sentencia de 23 de noviembre de 2009 y Caso González y Otras ("Campo Algodonero") vs México, Sentencia de 16 de noviembre de 2009, en <http://www.corteidh.org.cr/casos.cfm>.

3. EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

3.1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, surgió de la Resolución VIII de la V Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores (Santiago, 1959).⁴² Tenía según su Estatuto de 1960, un mandato limitado a la promoción de los derechos humanos.

Sin embargo, una vez creada, la propia Comisión pasó a luchar por una gradual expansión de sus funciones. Así en la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria de Río de Janeiro de 1965, por medio de la Resolución XII,⁴³ se ampliaron las facultades de la Comisión para que también pudiera recibir peticiones o comunicaciones sobre violaciones de derechos humanos. Además, se incluyeron entre dichas facultades de la Comisión, un sistema de informes de distintos tipos, el examen de las comunicaciones, la visitas de observación *in loco* a los Estados y la preparación de estudios y seminarios.

En los primeros años de su existencia la Comisión fue aún más allá de sus funciones formales. Ya como órgano de protección, en el caso de la República Dominicana (1965-1966), la Comisión Interamericana se transformó en verdadero órgano de acción actuando continuamente en aquel

⁴² *Conferencias Internacionales Americanas*, publicadas por la Secretaría General de la Décima Conferencia Interamericana, Washington, 1956, p. 26.

⁴³ *El Sistema Interamericano a través de Tratados, Convenciones y otros Documentos*, compilación anotada por García Amador, OEA, Washington, 1966, pp. 202-206.

país por más de un año, ampliando considerablemente sus atribuciones de órgano de observación y recomendación.⁴⁴

Cuatro años después durante el conflicto armado de Honduras y El Salvador (1969), miembros de la Comisión permanecieron en aquellos países por un periodo de aproximadamente cuatro meses. Ya no quedaba duda de que la Comisión se había consolidado como órgano de acción efectiva de protección de los derechos humanos.⁴⁵

Con el primer Protocolo de Reformas de la Carta de la Organización de Estados Americanos (Buenos Aires, 1967), que entró en vigor en 1970,⁴⁶ la Comisión fue finalmente erigida en uno de los órganos principales de la organización regional. De esta manera se fortaleció el estatus jurídico de la misma poniendo fin a eventuales objeciones de competencia, la Comisión pasaba así a disponer de una base convencional, con un mandato no sólo de promoción, sino también de control y supervisión, para lograr una debida protección de los derechos humanos. A partir de entonces la Comisión actuó con amplio margen de acción, por ejemplo en el Caso Chileno de 1973,⁴⁷ la Comisión se dedicó a la recolección de datos relevantes, realizó misiones de investigación y elaboró recomendaciones e informes al respecto.

En cuanto al examen de las comunicaciones recibidas sobre alegadas violaciones de los derechos humanos, la naturaleza de los procedimientos adoptados permitió a la Comisión actuar con flexibilidad y evitar rechazo inmediato

⁴⁴ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Diez Años de Actividades, 1971-1981*, Washington, 1982, p. 35.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 42.

⁴⁶ Organización de Estados Americanos, *Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, Actas y Documentos*, OEA/SER.K/XVI/1.2, reimpresión 1978, pp. 514 y ss.

⁴⁷ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Diez Años de Actividades, 1971-1981*, Washington, 1982, p. 40.

de ciertas comunicaciones con base a las condiciones de admisibilidad (tales como el requisito previo de agotamiento de los recursos internos por los peticionarios). A la Comisión le fue posible recurrir a las presunciones a favor de las presuntas víctimas, en lo que se refería a las condiciones de admisibilidad de sus comunicaciones.⁴⁸

En cuanto requisito del previo agotamiento de los recursos internos, la Comisión ha adoptado una diversidad de soluciones, que incluyen solicitud de informaciones adicionales y aplazamiento de la decisión (en lugar de simplemente rechazo de las peticiones) y reapertura subsiguiente de los casos. En efecto uno de los aspectos sobresalientes de la experiencia de la Comisión en esta área reside en el tratamiento dispensado a las llamadas situaciones generales, o casos en que se alegan violaciones generalizadas de derechos humanos.

En virtud de una regla de interpretación fijada en la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria (Río de Janeiro, 1965),⁴⁹ se admitió que el requisito de admisibilidad del previo agotamiento de los recursos de derecho interno no se aplicaría en tales situaciones graves. Dicha regla de interpretación se aplicó en algunos casos concernientes a la suspensión de garantías del debido proceso legal, ineficacia de los recursos de amparo y del *habeas corpus*. De este modo la práctica de la Comisión en este particular, incluso antes de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contribuyó a facilitar gradualmente el acceso de las presuntas víc-

⁴⁸ Cançado Trindade, Antônio, "O agotamento dos recursos internos a evolução da noção de vítima, Directo Internacional dos Direitos Humanos" en *Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos*, San José, Costa Rica, enero-junio, 1986, pp. 5-79.

⁴⁹ Actas y Documentos de la Reunión, Doc./OEA/SerieF/III.8, 300-301.

timas a la instancia internacional y a fortalecer su posición en el plano internacional.

3.2. Corte Interamericana de Derechos Humanos

Con la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969,⁵⁰ operan la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órganos de supervisión. La Comisión Interamericana fue dotada de una dualidad de funciones, por un lado continuó aplicando las normas que venían rigiendo su actuación en relación incluso a los Estados que no eran Parte y a las Partes de la Convención Americana y aplicó las disposiciones cuya vigencia comenzaron en 1969 con el Pacto de San José con relación a los Estados Parte del mismo.

La Corte Interamericana además de ejercer la facultad de resolver las peticiones que le sean sometidas por la Comisión Interamericana mediante su jurisdicción contenciosa, con fundamento en el artículo 62 de la Convención Americana, ejerce la función de emitir opiniones consultivas. Destacan con relación al tema de nuestro trabajo, las Opiniones, OC/8, OC/9, OC/11 y OC/16.

En la Octava Opinión Consultiva de la Corte de 1987,⁵¹ la Corte consideró que los recursos de *habeas corpus* no podían ser suspendidos a la luz del artículo 27(2) de la

⁵⁰ Entró en vigor la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, el 18 de julio de 1978, el Consejo Permanente adoptó la Resolución CP/RES.253 (343/78 V. OEA), "Transición entre la Actual Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos", Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Diez Años de Actividades, 1971-1981.

⁵¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva, OC/8/87, El *habeas corpus* bajo suspensión de garantías (arts.27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana) del 30 de enero 1987, <http://www.derhumanos.com.ar/opiniones%20consultivas/opinión%20consultiva%2001>.

Convención, porque constituían garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos y libertades regulados. La Corte, además advirtió que los ordenamientos constitucionales y legales de los Estados Parte que autoricen, explícita o implícitamente, la suspensión de los recursos de amparo o de *habeas corpus* en situación de emergencia "deben considerarse incompatibles con obligaciones internacionales que la Convención impone a esos Estados". En la ponderación de la Corte, la cuestión de la suspensión de las garantías judiciales no puede desvincularse del ejercicio efectivo de la democracia representativa a que alude el artículo 3, de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por su parte, la Novena Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de 1987,⁵² precisa que la obligación general de respetar los derechos reconocidos en la Convención se deriva del derecho de toda persona a un "recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes" para la protección de los derechos fundamentales reconocidos por la Convención, la Constitución o la ley (artículo 25.1 de la Convención). No basta con que los recursos estén previstos por el derecho interno se requiere su idoneidad y efectividad. La Corte agregó que el artículo 8 de la Convención no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino que reconoce el *due process of law* que se aplica "en lo esencial, a todas las garantías judiciales" referidas en la Convención, "aún bajo el régimen de suspensión regulado por el artículo 27 de la misma". Finalmente otras garantías, derivadas de la forma

⁵² Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC/9/ 87, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 28 Convención Americana de Derechos Humanos) de 6 de octubre de 1987, Serie A. No. 8, www.derhumanos.com.ar/opiniones%20consultivas/opinión%20consultiva%2011.

democrática de gobierno a que se refiere el artículo 29 de la Convención, implican no solamente una determinada organización política sino la necesidad de que las medidas tomadas por un gobierno en situación de emergencia cuenten con garantías judiciales y estén sujetas a un control de legalidad, de manera que se preserve el Estado de Derecho. En las Opiniones Consultivas Octava y Novena, la Corte desarrolló su razonamiento a partir de un enfoque pragmático, tomando en cuenta la realidad que vive nuestro continente e insistiendo en la intangibilidad de las garantías judiciales.

En la Undécima Opinión Consultiva (1990),⁵³ la Corte examinó la cuestión del agotamiento de los recursos internos de conformidad con el artículo 46 de la Convención Americana, decidió que tendría que abordar el cumplimiento de dicho requisito de modo claramente más flexible que en otros contextos, a la luz de la especificidad de la protección internacional de los derechos humanos, con la presunción de operar a favor de las presuntas víctimas. El requisito del agotamiento de los recursos internos según la Corte, no se aplica si un reclamante ante la Comisión se ha visto impedido de agotar o utilizar los recursos internos necesarios para proteger un derecho garantizado por la Convención. Mediante esta Opinión, la Corte precisó el alcance de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos, lo cual constituyó una aportación de importancia fundamental en América Latina, dadas las dificultades existentes de acceder a la justicia en las poblaciones carentes de recursos y de asistencia legal necesaria

⁵³ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC/11/90, Excepciones al agotamiento de los recursos internos (art. 46.1, 46.2^a y 46.2.b Convención Americana de Derechos humanos), del 10 de agosto de 1990, Serie A, No. 11, <http://www.derhumanos.com.ar/opiniones%20consultivas/opinion%20consultiva%2011>.

para la protección de los derechos consagrados en la Convención Americana.

Cabe mencionar por último la Opinión Consultiva OC/16, vinculada con la denegación de acceso a la justicia de los migrantes. La política gubernamental de criminalizar la migración irregular ha ocasionado diversos fenómenos negativos. Uno de ellos es la denegación del derecho de acceso a la justicia del que son víctimas, originada entre otras razones porque son detenidos y juzgados sin notificarle al Cónsul de su nacionalidad, funcionario que en caso de ser notificado en tiempo oportuno, aseguraría la debida asistencia legal y de un traductor a favor del detenido.

En relación a la problemática antes mencionada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos mostró un carácter innovador y creativo de enorme importancia, al determinar que gozaba de competencia para responder la solicitud de Opinión Consultiva hecha por México y determinar que la materia objeto de la misma era materia vinculada con los derechos humanos.

La OC/16, establece con claridad que el extranjero goza del derecho fundamental de asistencia consular el cual le permite acceder a la justicia. La no observancia del derecho contemplado en el artículo 36 de la Convención de Viena de Relaciones Consulares afecta las garantías del debido proceso legal del extranjero. A pesar de la existencia de la obligación de notificación consular previa o inmediata a la detención de los extranjeros, con dicha Opinión se dimensiona la notificación consular en el ámbito de la protección de los derechos humanos en específico en relación al derecho fundamental de acceso a la justicia.⁵⁴

⁵⁴ Cançado Trindade Antônio A., "The Humanization of Consular Law: The Impact of Advisory Opinion n. 16 (1999 of the Inter-American Court of Human Rights on International Case-Law and Practice", *Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional*, No. 18, Madrid, 2007, pp. 292 y ss.

En caso de no cumplirse con la referida obligación además de generar la responsabilidad internacional, por el incumplimiento de la obligación convencional, en lo relativo a los derechos humanos y al derecho de acceso a la justicia, el Estado deberá de iniciar de nuevo el proceso, previa notificación del Cónsul, para garantizar el ejercicio efectivo de dicho derecho. Cabe agregar, que el artículo 36, de la Convención de Viena de Relaciones Consulares y la OC/16, no distinguen entre inmigrantes regulares e irregulares por lo tanto la obligación del Estado, deberá cumplirse en igualdad de condiciones tanto si es un inmigrante regular o como un irregular.

3.3. Proyecto de Reforma al Sistema Interamericano

Durante la Presidencia de Antônio Augusto Cançado Trindade con el fin de avanzar en el acceso directo a las víctimas de violaciones de sus derechos al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, se realizaron diversas Reuniones de Trabajo de expertos para presentar una propuesta de reforma para el fortalecimiento del Sistema. Dichas reuniones comenzaron en 1999 y concluyeron en mayo de 2001 con un Informe denominado *Bases para un Proyecto de Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para Fortalecer su Mecanismo de Protección*.⁵⁵ Para lograr el mismo objetivo se adoptó un nuevo Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 25 de noviembre de 2003.⁵⁶

⁵⁵ Cançado Trindade, Antônio Augusto (Relator Especial) Informe: *Bases para un Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para Fortalecer su Mecanismo de Protección*, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José Costa Rica, 2001.

⁵⁶ Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, modificación aprobada por la Corte en su LXI Período Ordinario de Sesiones,

Desgraciadamente no todas las recomendaciones fueron adoptadas lo que ha ocasionado en muchas ocasiones que se generó una doble denegación del derecho de acceso a la justicia de muchas personas a nivel nacional e internacional, dentro de las recomendaciones no incorporadas ubicamos las siguientes:

- Las decisiones de la Comisión Interamericana en cuanto a la admisibilidad de comunicaciones o peticiones, deben ser pronunciadas *in limine litis* sin postergaciones. Es evidente que la decisión de admisibilidad es competencia privativa de los Miembros de la Comisión, el Secretario no puede más que asistirlos. Dichas decisiones deben encontrarse debidamente fundadas y motivadas, de otra forma se transforman las decisiones de la Comisión en resoluciones arbitrarias.
- Una vez concluido el examen del caso por la Comisión si ésta no lo envía a la Corte, debería esté órgano a través de un procedimiento *ad-hoc* dar seguimiento a sus resoluciones. En muchas ocasiones la falta de seguimiento ocasiona que las violaciones denunciadas persistan.
- Además habría que establecer criterios claros para el reenvío de casos de la Comisión a la Corte, la actual situación de indefinición genera en muchas ocasiones que se abandone a las víctimas, originando con ello su indefensión.
- Debe buscarse un mayor equilibrio entre las Partes en las distintas etapas procesales. Dicho

celebrado del 20 de noviembre al 4 de diciembre de 2003, durante las sesiones número 9 y 10 el día 25 de noviembre de 2003. Entrada en vigor 1 de enero de 2004.

equilibrio por ejemplo, debe alcanzar la notificación a ambas partes de toda y cualquier información sobre el trámite del caso en todas sus etapas debiendo las partes cumplir los requisitos convencionales.

- Teniendo siempre presente la posición de la persona humana como sujeto del derecho internacional de los derechos humanos, el artículo 61 (1) de la Convención debería modificarse de la siguiente manera “los Estados Parte, la Comisión y las presuntas víctimas tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte”.
- El artículo 77 de la Convención debe ser enmendado, en el sentido de que no sólo cualquier Estado y la Comisión, sino también la Corte pueden presentar Proyectos de Protocolos adicionales a la Convención Americana con miras a la ampliación de elenco de los derechos convencionalmente protegidos y al fortalecimiento del mecanismo de protección establecido por la Convención.⁵⁷

La falta de atención de dichas recomendaciones ha ocasionado que en la actualidad, la situación se haya transformado en angustiosa para miles de personas del Continente Americano que veían en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a un mecanismo

⁵⁷ Cançado Trindade, Antônio A., *El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (1948-1995): Evolución, Estado Actual y Perspectivas*, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, San José Costa Rica, Academia de Derecho Internacional de La Haya e Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Reimpresión facsimilar, 2005, pp. 81 y ss. Cfr. *Bases para un Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para Fortalecer su Mecanismo de Protección*, Vol. II, 2ª edición, San José Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003, p. 115.

de última instancia frente a las gravísimas violaciones de los derechos humanos, que aún se cometen en los países miembros de la Organización de Estados Americanos.

Desgraciadamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no funda, ni motiva sus resoluciones. En muchas ocasiones en escasas dos líneas niega la admisión de las peticiones de víctimas de violaciones de derechos humanos, ocasionando con ello que se cierre la única puerta de acceso a la justicia internacional interamericana.

La situación antes descrita se ha agravado, como se puede observar en los Votos Razonados y las Reflexiones de *lex lata* de Antônio A. Cançado Trindade en los Casos Mery Naranjo y Otros *vs* Colombia⁵⁸ y García Prieto y Otros *vs* El Salvador.⁵⁹ Expresa en su voto Antônio A. Cançado como posibles causas de denegación de justicia y falta de acceso a la justicia internacional, las siguientes:

- La exigencia del previo agotamiento de las medidas cautelares ante la Comisión antes de acudir a la Corte Interamericana para solicitar medidas provisionales de protección.
- La negativa de medidas cautelares por parte de la Comisión, sin motivar debidamente sus resoluciones. Las decisiones tanto de la Comisión para medidas cautelares como de la Corte en el caso de las medidas provisionales deben estar debidamente fundadas y motivadas, como garantía del principio contradictorio para que

⁵⁸ Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 22 de septiembre de 2006, Medidas Provisionales respecto de la República Bolivariana de Venezuela, a favor de Carlos Nieto Palma y otros.

⁵⁹ Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 26 de septiembre de 2006, solicitadas por Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto El Salvador, a favor de Gloria Giralte de García Prieto y otros.

los peticionarios se sientan seguros de que la cuestión que plantearon ha sido debidamente tratada por la instancia internacional.

- La resolución negativa de la Comisión de solicitar medidas provisionales a la Corte, igualmente sin el debido fundamento, es de igual forma causa de denegación de justicia y legítima a las víctimas potenciales, para recurrir a la Corte en búsqueda del otorgamiento de las medidas provisionales, ya que de otro modo se podría configurar una denegación de justicia a nivel internacional.
- En el caso de que el individuo peticionario en cuestión obtenga las dos negativas la de la Comisión y recurra a la Corte y ésta se abstenga de tomar medida alguna, por alegada falta de base convencional (por tratarse de un caso pendiente ante la Comisión y no ante la Corte) se podría configurar una denegación de justicia en el plano internacional. Situación que se presentó en los Casos Hermanos Dante, Jorge y José Peirano Basso *vs* Paraguay y Caso Loretta Ortiz Ahlf y Otros Ciudadanos Mexicanos *vs* México.⁶⁰

Otra circunstancia que afecta el acceso a la justicia efectiva en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como bien lo señala el Juez Manuel E. Ventura Robles⁶¹ y

⁶⁰ Hermanos Dante, Jorge y José Peirano Basso *vs* Uruguay del 07.07.2006 Doc. C.D.H.-S/1181 y Caso Loretta Ortiz Ahlf y Otros Ciudadanos Mexicanos *vs* México, del 19.09.2006, Doc. Corte IDH/1641.

⁶¹ Cançado Trindade, Antônio Augusto y Ventura Robles, Manuel E., *El Futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, 3ª edición, Corte Interamericana de Derechos Humanos, UNHCR y ACNUR, San José Costa Rica, 2005, p. 343.

cuya reforma fue propuesta, es el mantener la actual redacción del artículo 65 de la Convención Americana y no contemplar que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos o el Consejo Permanente desempeñen, en esta materia, una función similar a la del Comité de Ministros en el Sistema Europeo. Señala el juez Ventura Robles que de un total de casos contenciosos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos⁶² tenía bajo su jurisdicción en 2005, el 13.33% se encuentran archivados, el 30.66% se encuentran en trámite ante la Corte y el 56% se encuentran en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia.⁶³

De igual forma Thomas Buergenthal en un estudio de evaluación sobre los avances de los sistemas de protección de los derechos humanos, puntualiza que siguen existiendo en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, grandes lagunas en comparación con el Sistema Europeo, que sería necesario evitar para convertir en una realidad del continente americano la efectiva protección de los derechos humanos. Señala:

*América es un continente donde continua el sufrimiento ocasionado por la pobreza, corrupción, discriminación, donde faltan letrados, por no mencionar que los sistemas jurídicos son arcaicos que necesitan urgentemente reformarse. Además Estados Unidos de América y Canadá como algunos países del Caribe continúan sin ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos, algunas de las Cortes Nacionales en América les ha tomado un largo tiempo familiarizarse con la práctica de la Convención Americana.*⁶⁴

⁶² *Idem.*

⁶³ Cfr. Ventura Robles, Manuel, "La supervisión del cumplimiento de sentencias en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos", en *Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional*, No. 18, Madrid, 2007, pp. 167 y ss.

⁶⁴ Buergenthal Thomas, *American Journal of International Law*, Vol. 100, Núm. 4, ASIL, octubre de 2006, p. 797, (traducción de la autora).

Se puede concluir que actualmente se carece de acceso efectivo al sistema interamericano. Muchos de los abogados y defensores de derechos humanos que podrían asistir a personas que se les deniega el derecho de acceso a la justicia, no presentan las peticiones ante la Comisión Interamericana por la falta de confianza en el mecanismo de protección.

CONCLUSIONES

1. El derecho de acceso a la justicia se transformó, de un derecho de enunciación general y carente de efectividad, en un derecho fundamental de primer orden, cuya regulación exige un detalle muy minucioso, para garantizar de manera efectiva su ejercicio. Con base en los tratados, resoluciones, reglas y códigos de conducta del derecho internacional de los derechos humanos el contenido sustantivo mínimo de dicho derecho abarca: acceso a la jurisdicción; a un juez competente, imparcial y predeterminado por ley; a la tutela judicial efectiva; a un juicio justo; a la igualdad ante la ley y los tribunales de justicia; a la no discriminación por motivos de raza, nacionalidad, condición social, sexo, ideología política o religión; a la presunción de inocencia; irretroactividad de la ley penal; responsabilidad penal individual; derecho a la defensa y asistencia letrada, a comunicarse con su defensor en forma confidencial, sin demora y sin censura; disponer del tiempo necesario y de los medios adecuados para su defensa; a ser informado de manera inmediata y comprensible de sus derechos; a conocer los motivos de la detención y la autoridad que lo ordena; a ser juzgado dentro de un plazo razonable; a no ser juzgado dos veces por un mismo delito; a no ser encarcelado por el incumplimiento de deudas o de obligaciones contractua-

les; a no ser obligado a declarar, ni a confesarse culpable; a un intérprete o traductor; a la protección contra todo tipo de detención ilegal; al *habeas corpus* o al amparo; a un recurso efectivo ante tribunales superiores competentes, independientes e imparciales; a que en el proceso penal se asegure que la libertad será reconocida y respetada por regla general y la prisión preventiva constituya una medida de excepción y en caso de detención de un extranjero a la notificación consular inmediata.

2. Algunas de las razones por las cuales México no garantiza el derecho de acceso a la justicia y a un recurso jurídico eficiente para la protección de los derechos humanos, ajustándose a lo establecido en los instrumentos internacionales, son las siguientes: la primacía de la Constitución sobre los tratados de derechos humanos, la falta de asistencia jurídica gratuita en todos los procesos cuando se carece de recursos, la falta de eficacia, la no ejecución de las sentencias y el no garantizar el derecho de indemnización por error judicial.

3. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos deniega el derecho de acceso a la justicia en el ámbito internacional por las siguientes razones: no fundar y motivar todas sus resoluciones, la discrecionalidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para someter el asunto a la Corte Interamericana y la no obligatoriedad de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

BIBLIOGRAFÍA

- CANÇADO TRINDADE Antônio Augusto, *El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (1948-1995): evolución, estado actual y perspectivas*, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Hague Academy of International Law and the Inter-American Institute of Human Rights, San José, Costa Rica, 2005.
- _____, *The Humanization of Consular Law: The Impact of Advisory Opinion 16, of the Inter-American Court of Human Rights on International Case-Law and Practice*, ILADHI, No. 18, Madrid, 2007.
- _____, *Humanização do direito internacional*, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 2006.
- _____, *Derecho internacional de los derechos humanos. Esencia y trascendencia*, México, Ed. Porrúa-UIA, 2007.
- _____, "Formación, consolidación y perfeccionamiento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos", en *Jurídica*, Núm. 22, Universidad Iberoamericana, México, 1993.
- _____, *International Law of Humankind: Towards a New Jus Gentium*, General Course on Public International Law, Offprint from Collected Courses, Vol. 316 (2005), Tomo I y II, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/ Boston, 2006.
- _____, *The right of access to justice in the Inter-American System of Human Rights Protection*, *The Italian Yearbook of International Law*, Vol. XVII, Leiden, Boston, Ed. Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
- _____, "Coexistence and coordination of mechanisms of international protection of human rights", Offprint from Collected Courses, Vol. 202, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 1987.
- CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto y RUÍZ DE SANTIAGO, Jaime, *La nueva dimensión de las necesidades del ser humano en el inicio del Siglo XXI*, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, San José, Costa Rica, 2011.

- MERON T., *International Law in the Age of Human Rights*, General Course on Public International Law, Offprint from Collected Courses, Vol. 301 Leiden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
- ORTIZ AHLF, Loretta, *El derecho de acceso a la justicia de los inmigrantes en situación irregular*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2011.
- _____, *Derechos Humanos de los Indocumentados*, México, Ed. Tirant lo Blanch, 2013.